

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por OLGA ELENA HENAO RIVERA en contra de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA (Radicado 05001-31-05-021-2018-00382-01).

### **ANTECEDENTES**

La demandante inició este juicio para que una vez declarada la existencia de una relación laboral con la Universidad Cooperativa de Colombia de forma ininterrumpida iniciada el 10 de julio de 2006 bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, disponga el reconocimiento y pago del reajuste de los salarios a partir del 01 de julio de 2013 y hasta tanto se reconozca la pensión de invalidez, la indemnización moratoria por la no cancelación de las prestaciones sociales y los salarios, la indemnización por despido sin justa causa, los aportes a la seguridad social en salud y pensiones, el subsidio de transporte y la dotación, además de las costas y agencias en derecho.

Tales aspiraciones las fundamentó así: Inició a laborar al servicio de la Universidad Cooperativa de Colombia por medio de un contrato de trabajo que inició el 10 de julio de 2006 desempeñándose en la vigilancia de la portería del Bloque 1. Para el 02 de diciembre de 2006 continúa sus labores, pero por medio de un contrato suscrito con la CTA La Comuna, siendo celebrados a partir de ese momento sucesivos contratos con vigencias de seis meses o un año, conservándose como empleadora la Universidad. A partir del 01 de enero de 2017 no se le llamó a suscribir nuevo convenio y la CTA se compromete a cancelar una compensación ordinaria por la suma de \$306.000 que no sería inferior a las 48 horas para el trabajador de tiempo completo o a las 24 horas para el que laboraba medio tiempo. Desde el año 2009 devengó un salario superior al mínimo legal mensual vigente, estando bajo las órdenes de Marta Lucía Arango y Hernán Darío Arenas Córdoba y ejecutando funciones de servicios generales en la UCC, portando uniforme de esta institución, correspondiendo el lugar de la prestación de servicios a la Calle 50ª N° 41-34 en un horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. A partir del mayo de 2012 le aparecieron dolencias corporales y problemas de salud con emisión de recomendaciones de parte de Salud Ocupacional. En enero de 2013 se celebró contrato por el término de 6 meses, y sin razón aparente el 30 de junio de 2013 fue remitida a su casa, siendo llamada nuevamente el 01 de julio de 2013 para laborar medio tiempo determinación atribuida a las condiciones médicas. El 28 de septiembre de 2016 fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 50.30% con fecha de estructuración del 15 de febrero de 2016 sin que Colpensiones haya procedido a cancelar la primera mesada pensional. Agrega que las demandadas no han realizado la terminación del contrato de trabajo sin que se hayan cancelado las prestaciones sociales a que tiene derecho con base al salario real devengado ni le fue reconocida la indemnización que consagra la Ley 361 de 1997.

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA COMUNA en la respuesta al libelo aceptó que por intermedio suyo la demandante prestó sus servicios como asociada a la Universidad Cooperativa de Colombia del 10 de julio de 2006 al 02 de diciembre de ese mismo año, pero luego, sus labores las ejercía

directamente a la CTA, vínculo que termina el 15 de diciembre de 2017 por el reconocimiento e inclusión en nómina de parte de Colpensiones al serle reconocida una pensión de invalidez. Acepta el acuerdo de voluntades al que se llegó para trabajar la demandante medio tiempo, así como las recomendaciones laborales emitidas por Saludcoop, el contenido del dictamen de pérdida de capacidad laboral y las tutelas que interpuso para obtener el pago de incapacidades. Formuló como excepciones de mérito las que denominó: Inexistencia de contrato de trabajo con la Universidad Cooperativa de Colombia, inexistencia de contrato de trabajo a término indefinido, pago total de las pretensiones formuladas en la demanda, compensación, cobro de lo no debido, buena fe de las entidades demandadas, terminación por un modo legal de terminación del convenio de trabajo asociado y prescripción.

La UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA niega la vinculación laboral sostenida con la demandante y su responsabilidad de acreencias, aduciendo ser la CTA la parte empleadora frente a la prestación de servicios dados a la Universidad entre julio y diciembre de 2016, afirma no constarle las demás situaciones expuestas por serle ajenas. Como excepciones de fondo formuló las de prescripción, inexistencia del vínculo laboral y cobro de lo no debido.

En ese marco procesal, el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia el 16 de junio de 2021, ABSOLVIÓ a las demandadas de las pretensiones. DECLARÓ probada la excepción de ausencia de prueba de la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral. CONDENÓ en costas a la demandante, fijando como agencias en derecho el equivalente a medio salario mínimo legal mensual vigente.

Las activa aspira la revocatoria de la providencia argumentando que contrario a lo concluido por el Juez, está demostrado el contrato ejecutado con la Universidad Cooperativa de Colombia, cuya figura del convenio de asociación se utilizó para encubrirla, puesto que quedó probada la prestación personal del

servicio en la Universidad, bajo órdenes de cualquiera de las partes, además que las labores realizadas para esa institución siempre lo fueron de manera permanente, portando su uniforme, dándole la identidad ante la comunidad de ser su empleada. Advierte que la relación estrecha entre la UCC y la CTA era tal que no se distinguía la parte empleadora de la contratista, encontrándose desdibujado el convenio de asociación con paso a una intermediación laboral, considerando que la CTA es utilizada por la UCC para vulnerar los derechos de los trabajadores aun cuando debió vincular a la actora de forma directa no existiendo claridad de cuándo se enviaba en misión y cuándo no, agregando que dentro de la vinculación el horario fue disminuido al 50% por razones de su enfermedad.

La Sala conoce del asunto en el marco de la alzada, arribándose en el término pertinente por las partes sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Atendiendo la materia del recurso, los problemas jurídicos a resolver por la Sala se circunscriben a las siguientes cuestiones: 1) Decidir si se desnaturalizó o no la contratación a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado y por consiguiente, si con la Universidad Cooperativa de Colombia para el caso de la demandante existió una vinculación de carácter laboral, siendo la CTA La Comuna una simple intermediaria. 2) Concretar definido ello, si hay lugar a reconocer valores insolutos por cancelar para cubrir salarios que de lugar a rubros no pagados por prestaciones sociales, si debe condenarse al reconocimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social, estableciendo si procede la indemnización por despido sin justa causa, además de la viabilidad de imponer la sanción moratoria.

Contrato realidad

Para definir este aspecto, se tiene que las formalidades establecidas por los sujetos de la relación jurídica en este caso, apuntan a la vinculación de la demandante por la CTA La Comuna a partir del 10 de julio de 2006 por medio de sendos convenios de trabajo asociado (fls. 90-91, 93-94, 96-98, 100-102, 104-106, 108-110, 114-122) para desempeñarse en oficios varios, luego denominado el cargo como auxiliar de servicios generales, estando por fuera de discusión que la primera relación estuvo precedida de un convenio interadministrativo rubricado entre la UCC y la CTA demandadas, prestando sus servicios la demandante como asociada a la CTA La Comuna para la UCC (fls. 90-91) hasta el 02 de diciembre de 2006 (fl. 92).

Ahora, el polo activo de la Litis, asegura que sus funciones se extendieron al servicio de la UCC hasta diciembre de 2017 bajo idénticas condiciones, alegando de tal modo una labor permanente y misional ejecutada de manera continua y subordinada a la Universidad; sin embargo, está precisamente el argumento de la oposición basado en que a partir del convenio suscrito desde el 10 de enero de 2007 (fl.93-94), las tareas asignadas a Olga Elena Henao Rivera fueron desarrolladas directamente en la Cooperativa de Trabajo Asociado sin intervención de la Universidad que se demanda y a quien se atribuye la calidad de verdadero empleador bajo una relación de carácter laboral con regulación de la normativa sustantiva en ese sentido.

Para dilucidar tal dicotomía, fueron recepcionados los testimonios de HERNÁN DARÍO ARENAS CÓRDOBA y GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS traídos por la UCC, y se escucharon los dichos de JOSÉ LUIS ALZATE HENAO, LUZ MERY CARDONA HENAO y NATALIA ANDREA CARDONA HENAO por parte de la actora, cuyo análisis y razonamiento bajo la sana crítica permite dar razón al Juez de Primera Instancia que no encontró acreditada una relación de trabajo con la Universidad convocada por las reflexiones que pasan a exponerse.

La Universidad Cooperativa de Colombia como fue explicado por la testigo GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS - Secretaria General de la UCC-, es una institución de carácter privado que junto con la CTA La Comuna integran el sector de la economía solidaria, última que hace parte de la Asamblea General de la Universidad, así como la Cooperativa multiactiva Comuna, cuya vecindad o relación solidaria da lugar a la celebración y ejecución de convenios interadministrativos para satisfacer el objeto social de cada una, lo que dio lugar a que por medio de tales enlaces entre Universidad y Cooperativa, se tercerizaran labores incluidas las de aseo y servicios generales, lo que explica las tareas desplegadas por la demandante en las instalaciones de la UCC para el semestre del 10 de julio de 2006 al 02 de diciembre de esa misma anualidad, período mismo sobre el que el testigo José Luis Alzate Henao da certeza de haber visto laborando a Olga Elena Henao.

Ahora, a partir del 10 de enero de 2007, ha quedado demostrado que la demandante en efecto continuó en labores catalogadas como de servicios generales, pero lo que puede evidenciarse de las probanzas en conjunto, es que lo hizo en las instalaciones de la CTA La Comuna ubicada en la Calle 50 A N° 41-34 según delimitación de Hernán Darío Arenas, Luz Mery Cardona y Natalia Andrea Cardona, la que además se compadece con la relacionada en el hecho 13 del escrito de demanda, y está inmersa en la dirección que corresponde al Certificado de Existencia y Representación legal de dicha Cooperativa (fl.16-20), dejando claro Natalia Andrea Cardona que su madre luego de transcurrido el año 2006, prestaba sus servicios en el bloque de la comuna, advirtiendo hacer este parte de la Universidad que se demanda.

Lo que se vislumbra, es la patente confusión y equivocada percepción que la activa y sus testigos presentan, por lo menos Luz Mery Cardona y Natalia Cardona, que fueron las deponentes que suministraron información de las labores ejecutadas por la demandante a partir del año 2007, al tener como una sola a la UCC y la CTA en cuanto a su estructura física y organizacional, señalando ser esta última parte de aquella y hablar de ambas de forma indistinta, lo que da lugar a que se advierta de su parte que la prestación del

servicio fue dada en la Universidad, cuando es a todas luces evidente conforme a las probanzas arribadas en este trámite judicial, que desde el año 2007 Olga Elena Henao daba su fuerza de trabajo en las instalaciones de la CTA la Comuna, bajo órdenes según el mismo dicho de la activa de Hernán Darío Arenas Córdoba, quien fungió como gerente de la CTA hasta el año 2015 y luego, supeditada a las instrucciones de Marta Lucía Arango Arango quien ocupó ese cargo desde ese 2015 en adelante, y si bien esta se encontraba a cargo de la Dirección Administrativa de la Universidad en años anteriores, primero como trabajadora asociada, y luego como vinculada en acatamiento al Decreto 2025 de 2011, así como el señor Arenas Córdoba funge como vicerrector de la UCC a partir del 2015, no existe vestigio que ambos como empleados de la Universidad o laborando a su servicio se beneficiaran de manera directa de las funciones de la demandante, o intervinieran en ellas como representantes de quien la demandante afirma fue su verdadero empleador, pudiendo entenderse que la obediencia frente a estos provino en las épocas en las que tuvieron el rol de gerentes en la CTA, donde se desarrolló la labor de 2006 a 2017.

Debe precisarse que la prestación del servicio de la demandante contrario a lo aseverado por la mandataria judicial en la alzada, se encuentra derruida frente a la UCC a partir del año 2007, lo que impide dar aplicación a la presunción que pregonan el artículo 24 del CST, ya que en contraposición a ello, está suficientemente probado a partir de la claridad que se desprende de los deponentes de la pasiva en coherencia con las afirmaciones de sus representantes legales que en todos los aspectos sometidos a discusión en la etapa de trámite resultan absolutamente concordantes y coherentes incluso bajo el contraste de los hechos de la demanda y las aseveraciones de las dos testigos de la actora, que la demandante efectuaba sus labores de aseo en el bloque de “*la comuna*” donde se veía cumpliendo el objeto de su vinculación, recibía las visitas de su hija y Luz Mery Cardona le entregaba encargos de panadería, siendo cumplido su convenio en la UCC únicamente en el año 2006 bajo satisfacción normativa para esa labor con utilización de la figura del cooperativismo.

Conviene advertir que es indiscutido que las demandadas conservan una relación interadministrativa y sus sedes son concomitantes, pero se trata de personas de la economía solidaria autónomas e independientes con distinción de ubicación física, nit y objeto social (fls.12-20), por lo que atendiendo a que los convenios físicos dan cuenta de una asociación de la demandante a la CTA, misma que se encargó de asumir las compensaciones y obligaciones correspondientes, además de estar adecuadamente demostrado que en el plano de la realidad la demandante prestó su fuerza de trabajo fue en las instalaciones de esta, bajo dirección y control de su actividad de los encargados de la Cooperativa, no existe razón para atribuir a la Universidad la relación de trabajo disfrazada que se pretende enrostrar, donde ni siquiera existió el beneficio de un servicio brindado por la señora Olga Elena Henao.

Es cierto que existe confusión en cuanto a los uniformes que portaba la demandante, donde tanto Natalia como Luz Mery aseguran que su camisa blanca contaba con el logo de la UCC, por lo menos en algún período, dicho que por sí mismo, no tiene la entidad suficiente para endilgar un verdadero vínculo con la Universidad, si se confronta con el restante material probatorio proveniente incluso de la parte demandante, que contrario a generar duda como lo aduce la recurrente, brinda certeza sobre las labores directas realizadas para la Cooperativa, donde bien pudo atender eventualmente personal de la Universidad en reuniones realizadas dentro de las instalaciones de La Comuna, pero ello de ninguna manera desdibuja su calidad de trabajadora asociada cuyo poder de sumisión laboral era originario incluso desde julio de 2006 de la CTA.

De este modo, precisamente acudiendo a la aplicación del principio superior de la primacía de la realidad sobre las formas - artículo 53 C.P- como es pregonado por la accionante, se afirma que lo presentado en el caso de la promotora del juicio es un convenio de asociación con la CTA con ausencia de vínculo de carácter laboral frente a la UCC, ni intermediación o disposición del trabajo de la demandante para suministrar mano de obra temporal o permanente a la UCC como usuaria o tercera beneficiaria, por manera que la



decisión absolutoria de primer grado resulta acertada, y en esa medida habrá de ser confirmada.

Conforme a lo previsto en el artículo 365-1 del CGP las costas procesales en esta instancia estarán a cargo de la actora, fijando como por agencias en derecho la suma de \$500.000.


### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia apelada de fecha y procedencia conocidas.

Las costas en esta instancia son a cargo de la demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310502120180038201  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** NASLY SUGEY CIFUENTES VALENCIA  
**Demandado:** UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 19/07/2022  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario